

tificados que obran á fojas 15 y 16 del cuaderno de competencia formado en el juzgado de Apam, que está domiciliado en ese lugar, esos certificados expedidos sin citacion de parte no pueden hacer prueba plena, ya por esa circunstancia, ya por que los hechos de que Piña figure en primer lugar en el padron general de la 7ª seccion de la municipalidad de Apam, mandado formar en Enero del presente año para saber el censo actual del municipio, de que haya formado parte de las mesas electorales desempeñando uno de los cargos conferidos en ellos, y de que pague contribuciones predial y personal en la administracion de rentas del Distrito de Apam, á lo sumo probarán vecindad y que se tienen algunos bienes en ese Distrito, y ya por que en contrario, en los diversos negocios judiciales que Piña ha tenido en esta ciudad, y que por razon de competencia han venido á esta sala, aparece que en esta ciudad ha sido ejecutado; que en ella se ha presentado á seguir esos negocios; que en su casa, en la misma ciudad, se le han dejado instructivos etc, lo que prueba que México es el lugar de su domicilio. Considerando ademas: que las diversas competencias promovidas por causa de Piña entre los mismos juzgados, todas se han decidido por esta sala en favor del juzgado 2º de lo civil de esta ciudad, y que insistir una vez Piña en sustraerse de la jurisdiccion de los jueces de México, indica una temeridad marcada en esa sustraccion destituida de fundamento legal; con arreglo á las doctrinas de los autores citados por el mismo Piña y á lo dispuesto en las leyes 32 tit. 2º part. 3ª y 4ª tit. 3º de la misma partida, se declara:

Primero; de conformidad con lo pedido por el C. fiscal, que los tribunales ordinarios de México son competentes para conocer de la cesion de bienes que D. Rafael Piña y Benítez pretende hacer en favor de sus acreedores, reservándole la facultad de elegir entre ellos el que mejor le convenga.

Segundo; se condena en todas las costas

causadas en esta competencia al C. Rafael Piña y Benítez.

Tercero; remítanse las actuaciones al juzgado 2º de lo civil de esta ciudad, con copia certificada de esta sentencia; de la que se remitirá copia igual al juzgado de 1ª instancia de Apam, para los efectos consiguientes.

Cuarto; hágase saber y archívese el toca.

Así por unanimidad de votos la mandaron los CC. Presidente y Magistrados de la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Oyarzun.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Noviembre Primero de mil ochocientos setenta y uno.—*H. Guzman.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan por D. Encarnacion Guzman de Gamboa, contra una sentencia del juez 3º de paz de Merida, por creer que ella viola, las garantías que otorgan los artículos 14 y 126 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Por mas que en su extenso informe ha tratado de demostrar el C. Juez de paz 3º de esta capital la constitucionalidad de sus actos que motivan el presente juicio de amparo, y la improcedencia con que ha sido intentado contra lo que previene el artículo 8º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el fiscal no puede menos que convenirse, en vista de los documentos justificativos de dicho informe, de que el amparo es precedente, porque no se trata de un negocio propiamente judicial, en el sentido jurí-

dico de la expresion; y de que debe otorgarse este recurso, por que el acto reclamado, ó sea la sentencia que reacciona el recurso ha sido pronunciada con violacion de las garantías que otorga el artículo 14 del Código fundamental de la República.

El juez informante objeta, que este género de recursos solo pueden admitirse contra los actos de los jueces que arbitrariamente, *sin figura de juicio*, y únicamente por la autoridad de que se creen revestidos, han ejecutado. Pues esto es lo que acontece con el procedimiento del C. juez de paz 3º Lic. José G. Escalante, quien, *sin figura de juicio*, dictó una resolución que si pudiera llamarse verdadera sentencia judicial, ya no habria acto, por arbitrario que fuese, de cualquiera autoridad de ese género, que no estuviese cubierto con el manto de constitucionalidad que la preservase de la accion de la justicia federal que debe hacer efectivas las garantías que con él se violan.

El juicio, segun la definicion mas aceptada de este vocablo, es la legítima discusion de un negocio entre actor y reo ante juez competente que la dirige y determina con su decision ó sentencia definitiva."

En el negocio resuelto por el C. Escalante, no solo no ha habido discusion alguna sino que ni siquiera se contestó la demanda sobre la cual recayó su fallo: y tanto es así, que el representante del actor pidió en el acta inserta en el certificado á fojas 41 vuelta, que el reo la contestara por considerar impertinente, sin duda, el artículo de *incontestacion* que éste promovía como de previo y especial pronunciamiento. Además la ley 3. título 10. partida 3ª considera la contestacion de esencia del juicio cuando dice que es comenzamiento é raiz de todo pleito sobre que debe ser dada sentencia; luego si falta esta raiz ó base, como falta á la decision del C. juez de paz que nos ocupa, no puede llamarse sentencia dada en juicio, sino acto arbitrario ejecutado solo por la autoridad de que está revestido. Resulta por consiguiente, que segun la in-

terpretacion que dá al artículo 8º de la citada ley orgánica, y con la cual está conforme el infrascrito, el recurso contra ese acto es procedente. Ahora, en cuanto á las razones que existen para otorgarla, el fiscal poco tiene que decir para demostrarlas en grado de evidencia.

Antes, mucho antes de que se expidiera la ley local sobre inquilinatos sancionada el 28 de Marzo de 1870, se inició contra Dª Encarnacion Guzman de Gamboa la demanda sobre desocupacion de la casa que habita; y estando todavia en estado de contestarse ante el juez de primera instancia primero de lo civil de esta ciudad, vino dicha ley de 28 de Marzo; y como que favorecia los derechos é intereses del demandante, pidió que la cuestion se sujetase á los rápidos procedimientos que determinaba esa nueva disposicion. El expresado juez, se negó á ello fundándose, muy justamente en concepto del infrascrito, en que seria darle efecto retroactivo aplicándola á una controversia suscitada antes de su promulgacion. Mas el tribunal de 2ª instancia revocó esa resolución, y causando ejecutoria la dicha superioridad que mandó observar, en el caso de que se trata, la repetida ley local, pasaron los autos creados hasta entonces al conocimiento del juez de paz 2º ante quien el actor expresó que no venia intentando una nueva demanda sino á seguir la que ya tenia intentada, refiriéndose á sus fundamentos expuestos y á las constancias producidas ante el repetido juez de primera instancia.

Y bien, ¿esto nó es dar un efecto retroactivo á la ley? la ley misma nó será retroactiva, pero si lo es la aplicacion que de ella se ha hecho; y para el caso de infringir el art. 14 de la Constitucion, lo mismo dá que la retroactividad se encuentre en la propia ley, ó en la arbitrariedad del juez que la aplique.

Es sofístico asegurar, en disculpa de ese procedimiento atentatorio, que la ley así aplicada tan solo varía la forma pero nó

la esencia de la cuestion; pues ademas de que muchas veces sucede que del modo con que se sigue un juicio depende el exito de él, el citado artículo constitucional garantiza tambien que nadie puede ser juzgado y sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley. Es así, que la ley local tantas veces citada, fué dada con posterioridad al iniciar el juicio de desocupacion, y que el tribunal que existia para conocer del negocio, cuando se inició, era el de 1ª, 2ª y 3ª instancia que ha suprimido la repetida ley de 28 de Marzo; luego la aplicacion de ella, en el caso que nos ocupa, y en una resolucion que no puede llamarse judicial sino de juez, viola las garantías individuales que sanciona el art. 14 de la Constitucion.

En consecuencia, el fiscal pide que vd., con fundamento de él, y del 1º fraccion 1ª de la ley organica de 20 de Enero de 1869, ampare y proteja á la Sª Dª Encarnacion Guzman de Gamboa contra los actos del C. juez de paz tercero de esta capital que la obligan á desocupar la casa que actualmente habita dicha señora, en virtud de una resolucion dictada sin figura de juicio.

Mérida, Setiembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—*P. Hijuelos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

“Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan, Mérida Setiembre veintidos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por Dª Encarnacion Guzman de Gamboa, contra el C. juez 3º de paz de esta capital que la ha mandado lanzar de la casa que habita, con arreglo á la ley dada en 28 de Marzo del año próximo pasado, y promulgada en 28 del dicho mes y año, procedimiento contrario al art. 14 de la Constitucion federal.

Vistos los autos sobre la suspension del acto reclamado; el informe con justificacion del juez 3º de paz; el pedimento fiscal en lo principal; la citacion para sentencia, y Considerando:

Primero; que los hechos han pasado de la manera siguiente:

En 16 de Febrero de 1870, D. Manuel Dondé Cámara, puso demanda, previa conciliacion, ante el juzgado 1º de lo civil, contra la Sra. Guzman de Gamboa, por desocupacion de casa y pago de alquileres, de la situada en esta ciudad, mas de una cuadra al Sur, del extinguido colegio Seminario; que el Sr. Dondé Cámara dió ese alquiler al finado esposo de la demandada, desde el mes de Agosto de 1865, por catorce pesos cada mes, mientras se proporcionaba otra. En 21 del propio mes y año, el actor reformó su demanda, pidiendo solo la desocupacion de la casa, fundado en el título de propiedad que exhibió, y el certificado de la notificacion hecha á la Sra. Guzman de Gamboa, por escribano, á efecto de que desocupase la casa. En 10 de Marzo de dicho año, fué contestada la demanda, alegándose que la casa era de la demandada y que el actor nunca la habia tenido en posesion de hecho ni de derecho, porque la escritura de propiedad en que podia fundarse era nula, como se dijo desde la conciliacion; y cuando las partes estaban citadas para una reunion, atento á que la excepcion alegada estimó el juez que debia resolverse con el pleito principal, pidió el actor en 20 de Abril, que se diera al juicio la forma verbal que establecia la ley sobre inquilinato dada en 28 de Marzo de aquel año, cuya pretencion negó el juez, expresando que aquello seria dar á la ley efecto retroactivo; pero su auto fué revocado por la sala 2ª del tribunal superior y se le ordenó seguir el juicio fijado por la ley de 28 de Marzo. Mas, como la demandada expuso que no era inquilina sino propietaria y que en tal sentido no le comprendia la ley de inquilinato apelaba del auto en

que se le llamaba á continuar el juicio en forma verbal; se le concedió la apelacion, pero la referida sala 2ª mandó llevar adelante la secuela del juicio verbal que se hizo efectivo en acta de 27 de Junio del corriente. En esta acta, la Sra. Guzman de Gamboa, declinó de jurisdiccion y pidió: que sin reconocer los derechos del actor, se pasara el juicio al juez de paz, con arreglo á la ley de inquilinato; se definió á su solicitud remitiéndose los autos al juez 2º de paz ante quien comparecieron las partes, el 22 de Julio último, á continuar el juicio. La parte Guzman de Gamboa, dijo: que sin prorogar jurisdiccion y salvas las protestas oportunas, abria art. previo para que se declarase que no tenia obligacion de contestar la demanda, en cuyo estado y al citarse para fallar el art. fué recusado el juez 2º y pasó el asunto al 3º de paz, quien se dió á conocer y mandó citar en seguida para resolver, resolución que dió sobre lo principal, declarando comprendida la cuestion en la cuarta excepcion del art. 5º de la ley de 28 de Marzo del año próximo pasado, y mandando desocupar la casa en el término que señala el 2º punto del art. 6º de la citada ley, que es el de ocho dias, sin ulterior recurso, salvo el de responsabilidad, fallo que se estaba ejecutando por medio de la fuerza al inicio de este juicio.

Segundo; que de los hechos referidos se desprende; que si se considera el estado del juicio al darse la ley de 28 de Marzo del año próximo pasado sobre inquilinato, promulgado en 28 del mismo mes, la demanda estaba contestada y arraigada en juicio escrito ante el juez de 1ª instancia, quien habia citado á las partes para una reunion, porque estimó que la excepcion de nulidad opuesta era perentoria y debia resolverse en el pleito principal; de modo que al variarse el proceso de escrito en verbal, pasaba del juez de 1ª instancia al de paz, se aplicó la ley posterior al inicio del juicio, haciéndola volver sobre lo pasado para mu-

darlo, destruyendo los derechos adquiridos que es lo que se llama dar á la ley efecto retroactivo, pues segun la mentada ley el juicio de desocupacion, conforme á su mente es verbal y no tiene ningun recurso ulterior; mientras que el entablado ante el juez de 1ª instancia era escrito, con todas las dilaciones y recursos comunes, lo que quiere decir, que si la ley sobre inquilinato no es en sí retroactiva, se le ha dado tal efecto en su aplicacion, siendo en el fondo lo mismo que la ley sea retroactiva que el que se le dé ese efecto, porque el propio mal resulta en ambos casos, supuesto que la ley á nadie perjudica si no se aplica.

Tercero; que dicha retroactividad se deduce no solo de los hechos, sino hasta de lo alegado por la parte Dondé Cámara al abrirse la primera acta de juicio verbal, en la que expresó que no intentaba un juicio nuevo y que se presentaba á seguir el que antes habia iniciado.

Cuarto; que aunque se quiera decir que no es procedente este juicio porque se trata de otro contradictorio y la ley orgánica prohíbe el amparo en asuntos judiciales, el juez de paz 3º no cuidó que se contestara la demanda para darle un carácter de juicio nuevo, supuesto que no podia considerarse como tal la dada ante el juez de 1ª instancia por ser otra su competencia y jurisdiccion, circunstancia que no se ocultó al actor y por eso exigia la contestacion dicha; por consiguiente no hubo juicio ni se puede tener su resolucion de lanzamiento como fallo judicial, sino solo como acto de juez, que declaró ejecutoriado, sin ulterior recurso y se propuso llevarlo á cabo, aun por la fuerza por lo cual es indudable que procede el recurso presente.

Quinto; que la quejosa siempre protestó y puso á salvo sus derechos, manifestando que no le era aplicable la ley de inquilinato, porque no era inquilina sino propietaria.

Sesto; que por lo expuesto se violó el art. 14 de la Constitucion federal, sin em-

bargo de ser la suprema ley de la República, á la cual se deben sujetar los jueces aun de los Estados, conforme á su artículo 126.

Fundada en estas consideraciones la autoridad, en nombre de los supremos poderes de la Union falla:

Primero; se ampara y protege á la señora D^a Encarnacion Guzman de Gamboa, contra los actos del juez 3^o de paz de esta capital que la há mandado lanzar de la casa que habita, contra el art. 14 de la Constitucion federal.

Segundo; sáquese testimonio de este fallo para su publicacion, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para su revision, ambas cosas conforme á los artículos 13 y 27 de la ley suprema de 20 de Enero de 1869.

Hágase saber.—*I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México Octubre diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 23 de Agosto del corriente año, promovió ante el juez de Distrito de Yucatan D^a Encarnacion Guzman de Gamboa, contra la sentencia que pronunció el juez 3^o de paz de Mérida en el juicio sobre desocupacion de una casa, seguido por el C. Manuel Dondé Cámara contra la propia señora, alegando que esta autoridad habia violado en el juicio las garantías que otorga la Constitucion de la República en sus artículos 14 y 126, porque lo sentenció en 21 de Agosto de 1871, aplicando, en perjuicio de la quejosa como único fundamento, la ley de 23 de Marzo de 1870, cuando el contrato de arrendamiento se supone que fué celebrado en 1865, y el juicio fué iniciado en 1869.

Vistos los informes del juez 3^o de paz; los documentos justificativos que acompaña, entre ellos el testimonio del juicio sobre desocupacion de la casa; lo pedido por el Promotor fiscal; el alegato de la señora promotora; la sentencia del juez de Distrito y los escritos que remitieron á esta Corte Suprema de Justicia los interesados, con todo lo demas que fué necesario tener presente.

Considerando: que segun las constancias de autos, por decision judicial que consintió la señora Guzman de Gamboa, el juicio sobre desocupacion de casa promovido contra ella, se siguió conforme á la ley de 23 de Marzo de 1870, promulgada en 23 del mismo; que á solicitud de la señora, ese juicio pasó al conocimiento de los jueces de paz de Mérida, invocando la propia ley, y que ésto pudo aplicarse por el 3^o de esos funcionarios que sentenció en 21 de Agosto de este año, previniendo la desocupacion de la casa, supuesto el hecho de que la señora debia hasta entonces muchos meses de renta, y el derecho que aquella disposicion establece para tal caso, mas, siendo este el mismo que consignan las leyes relativas anteriores.

En mérito de estas consideraciones, que demuestran no haberse violado las garantías que invoca la quejosa, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve.

Primero; es de revocarse y se revoca la sentencia del juez de Distrito de Yucatan pronunciado en Mérida en 22 de Setiembre último, por la cual declara en nombre de los supremos poderes de la Union, que se ampara y protege á la señora D^a Encarnacion Guzman de Gamboa, contra los actos del juez 3^o de paz de esa capital, que la ha mandado lanzar de la casa que habita, contra el artículo 14 de la constitucion federal.

Segundo: la justicia de la union no ampara ni protege á la señora Guzman de Gamboa contra la sentencia del juez 3^o de

paz de Mérida, pronunciada en 21 de Agosto próximo pasado en el juicio sobre desocupación de casa seguido contra la misma señora Guzman por el C. Manuel Dondé Cámara.

Devuélvanse sus actuaciones al juez de Distrito de Yucatan con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lafragua.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre veinte y tres de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por los Sres. F. de la Vega y C^{as}, contra el tesorero general del Estado, que les exige trece pesos doce centavos, por derecho de mercado, correspondiente á veintium bultos de mercancías nacionalizadas en Guaymas que importó el vapor "Colon," por creer los quejosos que se viola con esta providencia la fracción 1^a del art. 112 de la Constitución federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

Los Sres. Fortunato de la Vega y C^{as} de este comercio, han ocurrido solicitando amparo contra la providencia del C. teso-

rero general del Estado, en virtud de la que se les cobran trece pesos y centavos por derecho de mercado, causado por la introducción de algunos bultos de efectos nacionalizados procedentes de Guaymas.

Esto caso es idéntico al que tuvo lugar en el amparo solicitado por la misma casa contra la tesorería del Estado que les exigió el pago de doscientos treinta y dos pesos cincuenta centavos por derecho de mercado, correspondiendo á 265 bultos de mercancías nacionalizadas: en aquel, ya el juzgado de su digno cargo y despues la Suprema Corte de Justicia, han resuelto que debía ampararse, como en efecto se amparó por la justicia de la Union á los solicitantes. Hoy pues, es inútil entrar al exámen de la presente solicitud, y el parecer de el que suscribe es que, por los mismos fundamentos y consideraciones que motivaron la suprema ejecutoria de 25 de Julio del corriente año, ese juzgado se sirva amparar á los Sres. Fortunato de la Vega y C^{as}, por el pago de trece pesos doce centavos que les exige la tesorería general del Estado.

Mazatlan, Setiembre diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado).—*L. Gaona*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Setiembre veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: los Sres. F. de la Vega y C^{as}, de este comercio, promueven juicio de amparo contra la providencia del C. tesorero general del Estado por la que se les exigen (\$ 13 12 cs.) trece pesos doce centavos valor del impuesto llamado de mercado, que deben satisfacer por los bultos de mercancías que nacionalizados en Guaymas les han venido á este puerto en el pailebot nacional "Colon," diciendo los quejosos que con tal providencia se quebranta la fracción 1^a del art. 112 de la Constitución general, y por consiguiente se invaden facultades